

LA ESTABILIDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

RAMON PEREZ MINAYA

Asistimos a uno de esos momentos que tienen una importancia trascendental en nuestras vidas. Para ustedes, los graduandos, esta tarde tiene y tendrá una extraordinaria implicación en el curso de su existencia. Acaban de agotar una etapa que, en la vida del hombre moderno, define en gran medida el desenvolvimiento de la que habrán de ser sus actividades productivas y sociales.

La relevancia de las presentes circunstancias se denota por el hecho de que muchos de ustedes están compartiendo la trascendencia del momento con los seres que más los quieren y que más les importan.

Nosotros, profesores y funcionarios del INTEC, participamos también de esta atmósfera de satisfacción espiritual que embarga este salón.

Y no es para menos. El día de hoy es la culminación de denodados esfuerzos, resultante de la conjugación de muchas voluntades.

Ciertamente, el mayor mérito es de ustedes, pero si reflexionamos sobre este asunto, concluiremos que son muchas las

Miembro de la Junta de Regentes del INTEC. Discurso de orden de la XII graduación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) el día 18 de octubre de 1986.

personas que en diversas formas han contribuido a que ustedes hayan terminado exitosamente sus carreras, desde aquellas personas que les brindaron su soporte económico, hasta la palabra de aliento del amigo en aquellos momentos en que la necesitaban.

Pero en este esfuerzo hay un aporte que no se percibe fácilmente, sobre el cual, precisamente, deseo hablarles. Se trata del costo social que imponen los estudios superiores a la sociedad dominicana.

Para hacer posible que una persona realice sus estudios universitarios, es necesario distraer crecientes recursos económicos de otras áreas, a veces más prioritarias.

Cuando me refiero a recursos económicos, incluyo aquellos aportes del Estado, así como los costos que ustedes han cubierto con sus propios dineros.

Según una investigación que se realizó simultáneamente en varios países latinoamericanos sobre el Gasto Público Social y sus Efectos Distributivos, y para la que INTEC hizo el estudio correspondiente a la República Dominicana, en nuestro país, en 1980, se destinaron unos RD\$44.0 millones de pesos para subvencionar los costos de la educación superior de unos 97,000 estudiantes. En esta cifra se incluye tanto el gasto del sector público como del privado.

Este monto pudiera parecer relativamente pequeño para las necesidades de un país que está tratando de superar sus seculares atrasos económicos y sociales.

Sin embargo, resulta desproporcionado cuando lo comparamos con los \$78.0 millones de pesos que gastamos en ese mismo año para sufragar el costo de la educación primaria de más de un millón de niños.

En términos per-cápita, o sea, tomando en cuenta el gasto por cada estudiante, nosotros destinamos siete veces más recursos a la institución universitaria que a la primaria. Mientras que esa relación en los otros países latinoamericanos, según el referido estudio, es significativamente inferior.

Por otro lado, la misma investigación revela que el 75% de los gastos en educación superior beneficia al 20% de las familias dominicanas que se encuentran en los niveles de más altos ingresos, lo que hace un fuerte contraste con los resultados de los otros países investigados.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que de acuerdo con una estimación que se realizó en el estudio que estamos citando,

más de 700,000 niños de 6 a 19 años quedan fuera de las aulas, tenemos que concluir que en la forma que distribuimos los recursos en la educación, supone una asignación en que las prioridades están invertidas, o sea, una asignación de los recursos injusta e infuncional para los propósitos del desarrollo económico y social. Viene a ser, en otras palabras, una especie de pirámide invertida donde los de arriba reciben la mayor parte de los beneficios, mientras que los muchos de abajo reciben la menor parte.

Definitivamente el graduado universitario es un verdadero privilegiado de nuestra sociedad. Pero es un privilegio que se fundamenta en una grave injusticia social. Una forma de dramatizar esta situación, es diciendo que el regocijo que sentimos en este momento lo hacen posible los millares de jóvenes dominicanos que han quedado fuera de las aulas.

La pirámide invertida a que hacemos alusión, o lo que también pudiera llamarse la pirámide de la desigualdad, no se presenta tan sólo en el caso de la educación. Algo semejante resulta en los otros sectores sociales: salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado. Conforme el estudio a que hacemos referencia, el país consistentemente tiene los peores indicadores en cuanto a la equidad y eficiencia en la asignación del gasto social. Además de que la proporción del gasto dirigido a esos sectores sociales en relación al gasto total, es significativamente menor en nuestro país que en las otras economías estudiadas. Puesto de otra forma, en comparación con las economías de la región, la República Dominicana exhibe unas injustas y regresivas estructuras del gasto, representadas en esas pirámides invertidas. Al extremo que podemos afirmar que nuestra sociedad está articulada por un conjunto de tales pirámides invertidas, las cuales por su propia naturaleza constituyen un sistema en precario equilibrio y que cualquier fuerza puede derribarlas como frágiles piezas de dominó en que, en forma sucesiva, unas empujan a las otras. Es decir, las presentes perspectivas permiten afirmar que la estabilidad de nuestras instituciones y la paz social pudieran en cualquier momento resquebrajarse bajo el peso de las enormes desigualdades sociales.

Para muchas personas esta aseveración puede resultar exagerada, fuera de toda proporción.

Reconozco que se trata de una apreciación con un alto grado de subjetividad, por lo que les solicito que se me permita adentrar un poco más sobre este tema. Quisiera compartir con ustedes mis puntos de vista al respecto, los cuales son el resultado de mis reflexiones a lo largo de mi vida profesional como economista.

Es mi convicción de que nosotros los dominicanos estamos definiendo un gran propósito nacional: hacer de nuestro país una nación moderna, libre y democrática donde impere el respeto a las libertades públicas. Tal proyecto nacional, no obstante, no parece una empresa viable, dentro de la trayectoria que viene siguiendo la sociedad dominicana.

En primer lugar, se debe reconocer que en los presentes momentos las posibilidades de crecimiento económico se encuentran bloqueadas por las fuertes restricciones de nuestro sector externo. La severidad de estas circunstancias raras veces son reconocidas en toda su magnitud.

Muchas veces pensamos, quizás justificadamente, que el deterioro de las actividades económicas ha sido el resultado de una administración ineficiente del Estado. Es cierto que ha habido desastrosos en la administración, pero eso tan sólo es parte de la verdad, por cierto no la más importante. La explicación reside, fundamentalmente, en las condiciones de la economía mundial.

Es el mismo error de apreciación que incurrimos en el pasado. Son muchos los que piensan que la rápida expansión de la economía en la década del setenta fue el resultado de las políticas aplicadas en ese período. Los que así piensan pierden de vista que lo que hizo posible ese período de auge económico en el decenio de los setenta, fue la extraordinariamente bondadosa coyuntura de la economía internacional.

Realmente, la prosperidad de esos años, que se manifestó en una intensa actividad de la industria de la construcción en las zonas urbanas, fue el resultado de la forma en que utilizamos los excedentes que se producían en el sector externo, debido a los favorables precios de nuestros productos de exportación; y otras condiciones de la economía internacional.

En efecto, las pequeñas economías latinoamericanas sólo han crecido en forma sostenida, únicamente en presencia de condiciones favorables en la economía mundial. Esto se aprecia con una simple revisión de la evidencia estadística.

En el caso dominicano en la presente circunstancia, se debe decir que la deteriorada situación del comercio exterior, el peso de la deuda externa, y la presión de los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, atentan nuestra economía, imponiendo fuertes restricciones en el gasto y en la definición de las políticas económicas y sociales; o sea que hoy, entre otras cosas, hemos perdido la libertad de adoptar las políticas que creamos convenientes para promover el desarrollo económico y social.

En consecuencia, no parece posible que podamos reeditar el período de rápido crecimiento de la década del setenta que, aunque en forma muy desigual, benefició a casi todos los estratos de ingresos, a pesar de que no se adoptaron medidas que favorecieran a los sectores sociales básicos, y de que el mismo se definiera como un modelo concentrador del ingreso y la riqueza. Se trató de una generalización del bienestar por medio del proceso que algunos científicos sociales llaman "goteo". Mediante este término se explica la mecánica de distribución del ingreso y la riqueza en los países en desarrollo cuando se presentan períodos de rápido crecimiento. En esas circunstancias los recursos se concentran en los estratos de altos ingresos, pero los beneficios del crecimiento permean hacia abajo, y benefician aunque en una proporción muy disminuida a las capas de ingresos bajos. Mediante un razonamiento, análogo, se explica que en una situación de estancamiento económico, se produce un proceso de deterioro en el bienestar económico, que golpea fundamentalmente a las clases bajas y los grupos medios urbanos. Esto último es la situación que ha prevalecido en los últimos años en el país; y que parece que se mantendrá por un largo período, debido, precisamente, a las fuertes restricciones del sector externo de nuestra economía a que se hacía alusión anteriormente.

Estoy convencido de que la adopción de cualquier esquema de política económica que funcionó en el pasado, no podrá reestablecer las condiciones para acelerar en forma significativa el ritmo de expansión de la economía.

Aún más, si fuera posible un rápido crecimiento de ésta, dadas las características del modelo vigente, no podría esperarse ningún cambio de importancia en el actual régimen de justicia social.

Debemos concluir, por tanto, que un pobre crecimiento en el ingreso per-cápita, implicaría, necesariamente, un proceso de empobrecimiento generalizado, agudizado por la mala distribución, la baja calidad y la poca cobertura de los servicios sociales; al mismo tiempo que la población percibe con mayor claridad las grandes desigualdades y cobra conciencia de sus derechos.

¿Cuánto tiempo una situación semejante podría coexistir con un clima de estabilidad y paz sociales? Esta es una interrogante difícil de contestar. Lo que a mí se me hace evidente es que se trata de condiciones incompatibles, de fuerzas que se mueven en sentido contrario y que a la corta o a la larga las tensiones que se están generando terminarán por irrumpir, dando al traste con el equilibrio social.

Ante estos razonamientos, se imponen ciertas conclusiones. Se

hace necesaria la adopción de un nuevo modelo de política económica y social, que tenga como propósito crear un proceso fuertemente distributivo, compatible con un clima favorable a las actividades de inversión y de producción. Se puede decir aún más, esto sería una condición necesaria en cualquier estrategia tendente a superar nuestra condición de país subdesarrollado. Empezar el desarrollo arrastrando el peso muerto de nuestras grandes masas analfabetas y desposeídas es camino largo hacia el progreso económico y social. La nueva orientación que aquí se propone sería posible si se destinara una mayor proporción de los recursos nacionales a los sectores sociales, lo que implica necesariamente una revisión de las prioridades nacionales. Esto significa, también, una disminución de los servicios y otros beneficios que reciben los grupos sociales de altos y medios ingresos, sobre todo los que habitan en las zonas urbanas.

Se debe asimismo procurar que los servicios básicos sean más eficientes y hacer esfuerzos deliberados a fin de que estos sean recibidos por los sectores más necesitados, con el propósito de que actúen como un mecanismo redistributivo, y no como sucede en la actualidad que el gasto social no parece aliviar la ya injusta estructura del ingreso.

Todo esto sería posible, solamente con la actitud solidaria, despojada de todo perjuicio ideológico de aquellos que tienen y pueden.

Sin embargo, ante la situación actual y esa posibilidad, existe un gran obstáculo; me refiero a cómo perciben la naturaleza de nuestros problemas y sus posibles soluciones, los grupos que inciden mayormente sobre el estado de opinión pública. Hablo de nosotros, los profesionales, empresarios, obreros, líderes sociales y otros grupos medios urbanos.

Se impone una revisión de nuestra percepción de estos aspectos. Se hace necesario un giro en la definición de nuestras prioridades nacionales.

A este respecto, les ruego me permitan concluir estas palabras expresándoles que mañana en el fragor de sus esfuerzos para aumentar sus ingresos personales y de su familia, no pierdan de vista su sitio privilegiado en la sociedad, y que cuando se encuentren arrellanados en sus relativamente cómodas posiciones ocupacionales, manténganse sensibles ante el sistema de injusticia imperante, no permitan que se les trastueque el orden de prioridades. No perciban las urgencias nacionales en función de la pavimentación de las calles, las fluctuaciones de la prima del peso o las concepciones muchas veces superficiales del hombre urbano.

Sobre todo mantengan presente que no hay milagros, los recursos son limitados y todas nuestras necesidades no pueden atenderse simultáneamente; un mejoramiento de los más significa necesariamente algún tipo de sacrificio de los menos.

Después de todo es muy poco lo que tenemos que ceder a cambio de todo lo que recibimos.